



**D´Antonio, Débora (comp.) (2017),  
*Violencia, espionaje y represión  
paraestatal. Seis estudios de caso sobre  
el pasado reciente argentino, Buenos  
Aires, Imago Mundi, 208 pp.***

**Laura Rodríguez Agüero\***

El libro *Violencia, espionaje y represión paraestatal. Seis estudios de caso sobre el pasado reciente argentino* representa una significativa contribución a un campo disciplinar que ha tenido un enorme desarrollo en los últimos años, nos referimos al estudio de la represión en la historia argentina reciente. A través de seis artículos, este libro plantea novedosas perspectivas de temas ya abordados, pero en esta oportunidad se pone el foco en ciertos actores y prácticas que no habían sido tenidas en cuenta en anteriores trabajos. En esa dirección, se aleja de las visiones que se han centrado exclusivamente en el carácter clandestino del accionar represivo, y analiza problemas centrales vinculados al desarrollo de una estrategia represiva que utilizó el Estado para abordar la denominada "guerra contra la subversión".

El primer artículo "Poder judicial, represión y violencia política en los setenta: la experiencia del 'Camarón'" de Débora D´Antonio y Ariel Eidelman estudia la creación y el funcionamiento de un instrumento del poder judicial creado para perseguir y reprimir el delito político entre 1971 y 1973: la Cámara Federal en lo Penal de la Nación. Esta herramienta punitiva, que surge bajo la idea de que los mecanismos legales eran insuficientes para combatir las "actividades subversivas", tenía la particularidad de ser ambulante y según señalan, D´Antonio y Eidelman, tuvo

\*Profesora y Licenciada en Historia (Universidad Nacional de Cuyo), Doctora en Historia (Universidad Nacional de La Plata). Contacto: lrodriguezaguero@gmail.com

un ágil funcionamiento. El análisis minucioso realizado a través de fuentes como los libros de mesa de entrada de las tres salas que componían la Cámara, permite observar claramente el rol del poder judicial en la legitimación de la represión y su contribución a través de instrumentos legales específicos. Por otra parte, el análisis no solo da cuenta de la persecución de personas vinculadas a organizaciones político militares, sino que además hace hincapié en la penalización de la difusión de ideas socialistas y materiales de izquierda, presta atención a la presencia de mujeres entre las personas procesadas, y pone en valor la actuación de la Asociación Gremial de Abogados en la defensa de presos políticos y presas políticas.

Ariel Eidelman, en "La actividad paraestatal en la Argentina a principios de los años setenta", reconstruye el temprano accionar represivo clandestino de grupos parapoliciales y paramilitares, mostrando acciones que van desde campañas de amenazas públicas y comunicados hasta atentados con bombas. Bajo la idea de que la violencia paraestatal fue una respuesta a la ineficacia de la violencia legítima estatal que buscaba poner límites al desarrollo de la lucha de clases, el autor estudia a las organizaciones paraestatales que actuaron durante los inicios de los setenta y aborda los primeros casos de desapariciones y secuestros. A través del análisis de algunos casos concretos, Eidelman muestra: cómo detenciones se transformaban en secuestros, las campañas públicas que lograban la aparición con vida de las detenidas y detenidos, la generalización del uso de la tortura a fines de los sesenta, y las tramas que vinculaban organizaciones parapoliciales con personal de inteligencia y de las fuerzas represivas. En este artículo, se analiza un lapso de tiempo que no ha recibido atención por parte de las investigaciones y se pone de relieve la ambigüedad entre detenciones legales y secuestros parapoliciales.

Luego, Débora D'Antonio en "Bajas, cesantías, suspensiones y renunciaciones forzadas: trabajadores y trabajadoras del Estado en la mira (Argentina: 1973-1983)" estudia la purga política del aparato del Estado a través de cierta legislación represiva contra la clase trabajadora en el ámbito público. Para ello analiza la creación y aplicación de las leyes de Prescindibilidad (1973-76) y de Seguridad Nacional (1974-76), herramientas que, durante el gobierno peronista, apuntaron a resolver conflictos políticos y sindicales, pero que durante la dictadura se combinaron con otros mecanismos represivos. En el artículo se aborda tanto la discusión en el Congreso de la ley de Prescindibilidad y su aplicación en Industrias Mecánicas del Estado (IME) como la utilización por parte de la dictadura de esas y otras herramientas legales con personas secuestradas y desaparecidas. La autora ubica ambos instrumentos legales como parte de una estrategia represiva

que apuntó a contener la resistencia obrera que se abrió con el ciclo de protestas en 1955, y que sirvió para expulsar trabajadores “sobrantes”, resolver tensiones al interior del peronismo y ampliar la cacería de activistas sindicales vinculados a la izquierda marxista.

Por su parte, el artículo de Facundo Fernández Barrio, “El Servicio Exterior argentino en la represión a la Contraofensiva de Montoneros en Brasil (1978-1980)”, analiza la actuación del servicio diplomático en la lucha contra la denominada “subversión” y el papel que jugaron instituciones estatales en la coordinación de la represión en el cono sur. A través de un exhaustivo trabajo empírico el autor demuestra la participación del Servicio Exterior argentino y de agentes del Batallón de Inteligencia 601 en la represión a la Contraofensiva Estratégica Montonera en territorio brasileño y su responsabilidad en la persecución y desaparición de siete personas. Fernández Barrio, además, discute con las interpretaciones que se han focalizado en el papel de los agentes clandestinos de los “Estados depredadores”, al hacer visible la participación de estructuras regulares del Estado en la represión extraterritorial.

Melisa Slatman en la propuesta “En la Argentina no había escuadrones de la muerte. El dispositivo represivo argentino, la responsabilidad primaria del ejército y la planificación centralizada-ejecución descentralizada (1975-1983)” aborda los principios de zonificación militar en el desarrollo de la estrategia represiva y el modo a través del cual se estructuró el sistema de inteligencia para contrarrestar la descentralización operativa. La autora cuestiona la idea de que la represión clandestina fue realizada por “patotas” y demuestra con solvencia que la misma fue “normativizada” por las fuerzas legales del Estado. Slatman complejiza y profundiza la idea de que hubo una “planificación centralizada y una ejecución descentralizada” de la represión, a través de una minuciosa descripción que muestra el funcionamiento de las cadenas de mando, el papel de la inteligencia y la división de tareas al interior de las distintas fuerzas.

Por último, Natalia Casola aborda en “La creación de la Escuela de Inteligencia Policial Héctor Ramos. La policía política entre la dictadura y la transición democrática” el surgimiento y puesta en funcionamiento de la Escuela de Inteligencia de la policía de Buenos Aires en 1977, conformada para “apuntalar los planes políticos de Camps”. La escuela, señala Casola, se propuso mejorar la formación de sus agentes para enfrentar los desafíos de la “guerra contra la subversión” y poner a la policía a la altura de los requerimientos de las Fuerzas Armadas. Este artículo realiza aportes novedosos al introducir un tema poco estudiado tal como la formación y el adoctrinamiento de los perpetradores y

señala continuidades del accionar de inteligencia durante la democracia, por ejemplo, en la vigilancia de exiliados chilenos.

Este libro constituye una gran contribución a las discusiones actuales sobre las diversas dimensiones y características de la represión estatal y paraestatal en Argentina y el Cono Sur durante la segunda mitad del siglo XX. Por una parte, identifica el desarrollo de una estrategia represiva estatal teniendo en cuenta rupturas, pero también continuidades entre gobiernos democráticos y de facto; y ubica el despliegue de dicha estrategia en un escenario signado por una agudización de la lucha de clases en un ciclo de protestas que habría tenido su inicio en 1955. Por otra parte, estudia y pone en valor la faz legal de la represión discutiendo con visiones que durante años hicieron hincapié en la faz clandestina, desconociendo la participación de actores y estructuras legales estatales. Para ello, a través de un riguroso trabajo con fondos documentales variados, aborda instituciones, legislación y normativas estatales que contribuyeron y estuvieron directamente implicadas en la persecución, asesinato y desaparición de personas. Todo ello sin dejar de lado el accionar paraestatal, que además es analizado en un lapso de tiempo escasamente abordado, como fueron los primeros años setenta. A su vez, analiza, como parte de una misma trama, los aspectos legales e ilegales/clandestinos, que muchas veces han sido entendidos como esferas separadas, lo que permite brindar explicaciones integrales de estos complejos procesos históricos. Finalmente, tiene en cuenta la dimensión sexo genérica de la represión cuando presta atención, en algunos artículos, a la situación de las mujeres como víctimas de los distintos dispositivos represivos.